



Asamblea General

Distr. general
17 de marzo de 2021
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 89º período de sesiones, 23 a 27 de noviembre de 2020

Opinión núm. 92/2020 relativa a Mohammed Essam Al-Faraj (Arabia Saudita)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 17 de julio de 2020 al Gobierno de la Arabia Saudita una comunicación relativa a Mohammed Essam Al-Faraj. El Gobierno respondió a la comunicación el 14 de septiembre de 2020. El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).



Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Mohammed Essam Al-Faraj es un nacional de la Arabia Saudita, nacido en febrero de 2002. Antes de su detención, residía en Al-Awamiyah, cerca de Qatif, en la Provincia Oriental del país. Es un activo practicante del islam chií.

Detención y privación de libertad

5. Según la fuente, el Sr. Al-Faraj fue detenido el 29 de junio de 2017, cuando tenía 15 años, al salir de una sala de juegos en Medina. Fue detenido junto con otras siete personas por la policía local de la ciudad, que lo mantuvo recluido, inicialmente en el centro de privación de libertad de la Dirección General de Investigación (Al Mabahiz) de Medina.

6. La fuente explica que las autoridades no presentaron una orden de detención ni informaron en el acto a los interesados de los motivos de su detención. El Sr. Al-Faraj permaneció en el centro en Medina durante dos días, tras los cual fue trasladado al centro de privación de libertad de la Dirección General de Investigación (Al Mabahiz) en Dammam, que normalmente se utiliza solo para presos adultos. Al parecer, el centro no dispone de instalaciones adecuadas para mantener a los menores de edad separados de los adultos.

7. La fuente alega que, durante la reclusión e interrogatorio del Sr. Al-Faraj en el centro de privación de libertad de Al Mabahiz en Dammam, este fue torturado por agentes de seguridad. Fue mantenido en régimen de aislamiento durante dos meses, a lo largo de los cuales recibió golpes y patadas y debió permanecer de pie y en posturas forzadas por hasta cuatro horas seguidas. Debido a la tortura, padece ahora enfermedades crónicas, incluida hipertensión arterial, y ha sido trasladado al hospital del centro en al menos una ocasión.

8. La fuente explica que, para poner fin a las torturas y el maltrato, el Sr. Al-Faraj firmó un documento en el que se confesaba culpable de los delitos de los que las autoridades acabarían por acusarlo. En ningún momento durante su tortura o encarcelamiento se le permitió acceder a un abogado. Hasta el momento, al leer el documento de la fuente, las autoridades no han emprendido ninguna investigación sobre el trato o la tortura de que fue objeto el Sr. Al-Faraj durante su privación de libertad.

9. Al parecer, el Sr. Al-Faraj ya llevaba cinco días recluido en la prisión de Al Mabahiz, en Dammam, cuando las autoridades notificaron su detención a su familia. Incluyendo los dos primeros días que estuvo en Medina, las autoridades mantuvieron al Sr. Al-Faraj en régimen de incomunicación durante siete días. Cuando su familia pudo por fin visitarlo, después de que hubiera permanecido durante dos meses en régimen de aislamiento, su mal estado de salud era aparente.

10. La fuente explica además que las autoridades acusaron al Sr. Al-Faraj de formar una célula terrorista para atentar contra guardias de seguridad con la intención de matar; vigilar a las patrullas de policía y sus movimientos en la comisaría de Al-Awamiyah, hacer llegar la información a un hombre buscado, encubrirlo y no proporcionar información sobre él a las autoridades; participar en protestas y funerales de personas a las que el Estado había presuntamente dado muerte y corear consignas contra el Estado; y almacenar y enviar información que podría suponer una amenaza para la seguridad pública.

11. La fuente precisa que los delitos de los que se acusa al Sr. Al-Faraj tuvieron lugar antes de que este alcanzara la mayoría de edad, es decir, antes de que cumpliera los 18 años. Ninguno de los delitos es de naturaleza violenta, y algunos —incluidos los relacionados con la participación en protestas y la asistencia a funerales— se remontan a cuando tenía 9 años de edad. A pesar de ello, esas acusaciones podrían hacer que el Sr. Al-Faraj sea condenado a muerte, y la fiscalía ha solicitado su ejecución.

12. El Sr. Al-Faraj admite que estuvo presente en los funerales y las protestas mencionados en el escrito de acusación, manifestándose contra el Gobierno. También afirma que envió mensajes de texto a grupos de WhatsApp sobre los movimientos de agentes de policía en una comisaría que se ve de su casa o en sus alrededores, pero que no sabía que esos mensajes podían acabar siendo utilizados para cometer actividades delictivas, y que

terminó todo contacto con esos grupos al sospechar que podían estar implicados en actividades de ese tipo.

13. La fuente explica que, a junio de 2020, debido a la crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), el juicio del Sr. Al-Faraj aún no ha comenzado. Sin embargo, en las alegaciones provisionales vinculadas al juicio, la fiscalía solicitó la pena de muerte por delitos *hudud*. La Arabia Saudita divide los delitos penales en tres categorías: la primera y más común, los delitos *ta'zir*, que a grandes rasgos son aquellos en que la estipulación de las penas queda a discreción del gobernante o el gobierno; la segunda, los delitos *hudud*, cuyo castigo está prescrito en el Corán; y la tercera, *qisas*, de delitos castigados con el talión.

14. Además, especifica que, en 2018, el país promulgó una nueva Ley de Menores en Conflicto con la Ley a fin de reducir la imposición de la pena de muerte a los menores de edad. Esta Ley prohibió a la fiscalía pedir la pena capital por delitos *ta'zir*, pero le siguió permitiendo solicitarla por delitos *hudud* y *qisas*. A principios de 2020, el Gobierno promulgó una nueva ley que restringió aún más el uso de la pena de muerte para los delitos cometidos por menores infractores, ampliando retroactivamente la aplicación de la Ley de 2018 a casos juzgados antes de su promulgación. Ninguna de estas leyes afecta a la facultad de la fiscalía de solicitar la pena de muerte para el Sr. Al-Faraj por delitos *hudud*.

Análisis jurídico

15. La fuente sostiene que la detención del Sr. Al-Faraj y el trato del que fue objeto violan las obligaciones de la Arabia Saudita en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que se adhirió el 26 de enero de 1996. La fuente recuerda que el artículo 37, párrafo a), de la Convención establece que ningún niño será sometido a torturas, ni se le impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua; el párrafo b) de ese artículo, que ningún niño será privado de su libertad arbitrariamente; su párrafo c), que todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y respeto; y su párrafo d), que todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica.

16. La fuente argumenta que, en el presente caso, la Arabia Saudita privó al Sr. Al-Faraj de su libertad sin notificarle los motivos de ello, ni proporcionales acceso a un abogado, y lo mantuvo en régimen de incomunicación durante una semana. Este fue presuntamente objeto de torturas y de un trato que hizo caso omiso de la inviolabilidad de su persona e incluyó palizas, posturas forzadas y períodos prolongados de aislamiento, entre otras cosas. Cuando las autoridades competentes anunciaron las acusaciones, muchas de ellas vulneraban sus derechos humanos a la libertad de asociación y expresión protegidos internacionalmente.

17. La fuente sostiene también que la detención del Sr. Al-Faraj y el trato que recibió son contrarios a las obligaciones que incumben a la Arabia Saudita en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a la que se adhirió el 23 de septiembre de 1997. La fuente recuerda que el artículo 2 de la Convención impone a los Estados la obligación positiva de impedir los actos de tortura en su territorio. En virtud de su artículo 4, los Estados Partes deberán tipificar como delito el uso de la tortura y, con arreglo a su artículo 6, investigar toda denuncia verosímil de tortura y sancionar a los autores de esos actos. Sin embargo, la fuente afirma que la Arabia Saudita no previno eficazmente la tortura del Sr. Al-Faraj, no ha investigado los actos de tortura cometidos contra él y no ha castigado a los autores de esos actos. El artículo 5 de la Convención estipula que todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración. Al parecer, la fiscalía se basará en la confesión extraída mediante tortura al Sr. Al-Faraj como prueba para condenarlo y ejecutarlo.

18. Según la fuente, el trato dispensado al Sr. Al-Faraj se inscribe en la categoría II de privación arbitraria de libertad. Se ha acusado al Sr. Al-Faraj de varios delitos relacionados con su asistencia a protestas pacíficas y funerales, y con su manifestación de una opinión política contraria a la del Gobierno. También se le acusa de transmitir información que podría suponer una amenaza para la seguridad pública.

19. Además, se afirma que la reclusión del Sr. Al-Faraj se inscribe en la categoría III del Grupo de Trabajo, porque no se le notificaron los motivos de su detención; se le mantuvo en

régimen de incomunicación durante una semana, en la cual las autoridades lo torturaron para forzarlo a confesar; y en ningún momento tuvo acceso a un abogado. La fuente afirma que, aunque el juicio aún no ha tenido lugar, es evidente que el Gobierno está creando de antemano las condiciones para un proceso sin las debidas garantías, con la intención de condenarlo injustamente.

20. Asimismo, argumenta que la reclusión del Sr. Al-Faraj se inscribe en la categoría V del Grupo de Trabajo, dado que se le acusa de asistir a funerales y protestas políticas y de corear consignas contra el Estado.

21. Además, la fuente afirma que la reclusión sin juicio del Sr. Al-Faraj durante casi tres años se inscribe en la categoría I del Grupo de Trabajo. Durante ese período, que incluye su reclusión inicial de una semana en régimen de incomunicación, este ha permanecido privado de libertad sin ser acusado ni juzgado. El interesado era menor de edad en el momento de su detención y durante la mayor parte de su privación de libertad en curso, por lo que debería beneficiarse de un mayor nivel de control en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Respuesta del Gobierno

22. El 17 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno con arreglo a su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno que facilitara, a más tardar el 15 de septiembre de 2020, información detallada sobre la situación del Sr. Al-Faraj, así como sus observaciones sobre las alegaciones de la fuente. Además, el Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que garantizara la integridad física y mental del Sr. Al-Faraj.

23. En su respuesta del 14 de septiembre de 2020, el Gobierno afirma, en primer lugar, que las alegaciones de la fuente son inexactas y que esta que no ha aportado ninguna documentación o prueba que las sustente. El Gobierno de la Arabia Saudita está estudiando las alegaciones y aclarando los hechos del caso en el marco de su cooperación con los mecanismos de derechos humanos.

24. El Gobierno afirma que el Sr. Al-Faraj fue detenido y recluido en virtud de una orden de detención dictada de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2013 (Real Decreto núm. 16 de 27 de diciembre de 2013). Se le acusó de terrorismo y se le informó de los motivos de su detención de acuerdo con el artículo 36, párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal. El interesado fue recluido en un centro especial para menores de edad.

25. Con respecto a las alegaciones de que el Sr. Al-Faraj fue sometido a tortura y colocado en régimen de aislamiento, de que se le negó el derecho a ponerse en contacto con un abogado y se le obligó a firmar una confesión para poner fin a la tortura, y de que, en consecuencia, este sufre de mala salud y dolores crónicos, el Gobierno niega las alegaciones de tortura y confirma que la tortura está prohibida en la legislación nacional, a saber, en los artículos 2 y 102 del Código de Procedimiento Penal. Además, la legislación nacional ofrece salvaguardias que garantizan los derechos del interesado. El artículo 6 de la Ley de Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2013 establece que, en interés de la investigación, se puede negar a una persona el derecho a ponerse en contacto con un tercero de su elección durante un plazo limitado. Esto no interfiere con su derecho a ponerse en contacto con sus familiares para informarles de lo sucedido. Al interesado no se le negó el derecho a ponerse en contacto con su abogado. Además, reconoció libremente la comisión de varios delitos de terrorismo, confirmó ante los tribunales la validez de su confesión y no alegó en ese momento haber sido obligado a confesar.

26. El Gobierno también informa de que el Sr. Al-Faraj goza de buena salud, se sometió a una revisión médica ni bien fue recluido, recibió toda la atención médica que necesitaba y puede ejercer su derecho a recibir visitas y tener contacto con terceros.

27. Según el Gobierno, el Sr. Al-Faraj fue acusado de delitos de terrorismo violento, a saber: a) participar en la creación de una entidad terrorista cuyo objetivo es matar a agentes de la ley; b) hacer un seguimiento de los vehículos policiales y los movimientos en una comisaría y enviar información a una persona buscada por las autoridades, con la intención

de atacar contra la policía de forma previamente concertada; c) albergar a un hombre buscado, no informar de su paradero y colaborar con él para alterar el orden y atacar contra la seguridad pública; d) participar en disturbios con el fin de quebrantar la paz y el orden público y socavar la unidad nacional; y e) almacenar y difundir materiales que atacan contra el orden público, un delito tipificado en el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos.

28. El Gobierno argumenta que, después de que el Sr. Al-Faraj fuera interrogado e imputado, la fiscalía determinó que había pruebas suficientes para remitir el caso a los tribunales. En la vista, con arreglo al artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, se le leyó el escrito de acusación de la fiscalía, del que le entregó una copia, y le solicitó que formulara alegaciones. La fiscalía pidió las penas correspondientes, entre ellas la pena de muerte. Ello tuvo lugar antes de la aprobación de la Ley de Menores en Conflicto con la Ley de 2018, que eliminó la pena de muerte para quienes no hayan cumplido los 18 años de edad en el momento de la comisión del delito. Esta Ley dispone que, en esos casos, la pena de muerte será sustituida por una pena de hasta diez años de privación de libertad. La Ley se aprobó durante el juicio y la Fiscalía modificó la pena solicitada en consecuencia. El tribunal le explicó al acusado sus derechos. El Sr. Al-Faraj solicitó representación legal y esta le fue concedida, y pudo responder a las acusaciones. Tras varias vistas, todas ellas públicas, pidió un abogado de oficio, lo que le fue concedido. El tribunal le nombró un abogado y su caso sigue en trámite ante el tribunal.

29. El Estado afirma además que la fiscalía es una entidad independiente que forma parte del poder judicial y que las acusaciones de la causa no guardan relación alguna con la libertad de expresión y de reunión. Señala que todos los habitantes del país disfrutan de sus derechos y libertades, sin discriminación ni forma alguna de trato preferente.

30. El Gobierno precisa que sus leyes protegen la libertad de opinión y de expresión y garantizan el ejercicio de estos derechos siempre que no supongan una infracción de la ley o una afrenta a la sociedad, las personas o la moral pública. Estas restricciones son compatibles con las normas internacionales, incluidos el artículo 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto a la libertad de reunión, la legislación nacional prohíbe la celebración de cualquier tipo de concentración que pueda atacar contra la seguridad pública y la estabilidad nacional. Todos los organismos estatales están obligados por ley a tratar a todas las personas por igual, con independencia de su fe, etnia, sexo o nacionalidad. Existen varios mecanismos para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos y salvaguardar estos derechos, a saber, el poder judicial y los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los derechos humanos. El derecho a recurrir a la justicia está garantizado a todos por igual en el artículo 47 de la Ley Fundamental del país. El artículo 43 de la Ley Fundamental también reconoce el derecho de todos a presentar quejas y reclamaciones a las autoridades saudíes.

31. El Gobierno reitera que el Sr. Al-Faraj no fue sometido a tortura y que se adhiere a la Convención contra la Tortura. El interesado confesó libremente los delitos y reafirmó su confesión ante el tribunal, sin argumentar haber sido objeto de coacción.

32. El Gobierno también reitera que cumple los tratados de derechos humanos y que los delitos objeto de la causa no guardan relación alguna con la libertad de expresión y de reunión. En la Arabia Saudita nadie está privado de libertad por ejercer sus derechos y libertades, de los que todos gozan sin discriminación. El interesado fue tratado con respeto a su dignidad y se le garantizaron sus derechos. Fue acusado de delitos de terrorismo que no guardan relación alguna con la expresión de opiniones políticas o la participación en protestas pacíficas.

Comentarios adicionales de la fuente

33. El Grupo de Trabajo envió la respuesta del Gobierno a la fuente, que presentó sus comentarios el 25 de septiembre de 2020. En su respuesta, la fuente observa que corresponde al Gobierno aportar pruebas que respalden su afirmación de que el Sr. Al-Faraj fue detenido en virtud de una orden de detención dictada de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2013 y que se le informó de los motivos de su detención de acuerdo con el artículo 36, párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal.

34. Según la fuente, el Gobierno tampoco ha aportado pruebas que demuestren que el Sr. Al-Faraj estuvo encarcelado en un centro para menores infractores, y ha hecho las afirmaciones contradictorias de que la ley saudí prohíbe a los sospechosos de terrorismo ponerse en contacto con el mundo exterior y de que al Sr. Al-Faraj se le permitió ponerse en contacto con quien quisiera.

35. Con respecto a la alegación de tortura, la fuente señala que el Gobierno tampoco ha aportado ninguna prueba en contrario, aparte de la existencia de leyes que la prohíben. Por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de proceder a una investigación pronta e imparcial, con arreglo al artículo 12 de la Convención contra la Tortura, ya que hay motivos razonables para creer que el Sr. Al-Faraj fue sometido a tortura.

36. La fuente también rechaza las acusaciones de terrorismo violento formuladas por el Gobierno contra el Sr. Al-Faraj, por considerar que se trata de una tergiversación de su ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el Sr. Al-Faraj no ha tenido la oportunidad de cuestionar estas acusaciones ante los tribunales, y su confesión se obtuvo mediante tortura.

37. En opinión de la fuente, el Gobierno no ha aportado ningún documento que pruebe su afirmación de que el Sr. Al-Faraj solicitó representación legal o que se asignó un abogado, y tampoco ha facilitado las fechas y lugares en que se celebraron las presuntas vistas públicas. El escrito de acusación se le presentó por primera vez el 16 de septiembre de 2019, en la primera y única vista que tuvo lugar.

38. La fuente también rebate la afirmación del Gobierno de que la fiscalía pidió inicialmente la pena de muerte hasta 2018, pero que desde entonces la ha retirado del escrito de acusación, de conformidad con las reformas recientes que presuntamente han abolido esa pena para los delitos *ta'zir*. En los hechos, la fiscalía solicitó la pena de muerte para el Sr. Al-Faraj por delitos *hudud* el 16 de septiembre de 2019, tras la promulgación de la Ley de Menores en Conflicto con la Ley (Real Decreto núm. 113, de 31 de julio de 2018), ya que los delitos *hudud* están explícitamente excluidos de la aplicación de esa Ley. A 24 de septiembre de 2020, el Real Decreto de 24 de marzo de 2020 no ha sido publicado, por lo que los menores infractores siguen corriendo el riesgo de ser ejecutados por delitos *hudud*. La familia del Sr. Al-Faraj no ha recibido ninguna notificación de que la fiscalía haya retirado la solicitud de la pena de muerte. El Gobierno debe presentar un escrito de acusación modificado que demuestre que se ha retirado la petición de la pena capital e indique la pena máxima solicitada.

Deliberaciones

39. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información que han facilitado en relación con la privación de libertad del Sr. Al-Faraj.

40. A fin de determinar si la privación de libertad del Sr. Al-Faraj fue arbitraria, el Grupo de Trabajo se remite a los principios establecidos en su jurisprudencia para tratar las cuestiones probatorias. Si la fuente ha revelado la existencia de indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (A/HRC/19/57, párr. 68).

41. La fuente ha alegado que la privación de libertad del Sr. Al-Faraj se inscribe en las categorías I, II y III. El Gobierno niega estas alegaciones y sostiene que la detención y posterior reclusión del Sr. Al-Faraj se llevaron a cabo con arreglo a la legislación nacional. El Grupo de Trabajo recuerda que ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que, incluso cuando la detención de una persona se ha llevado a cabo de conformidad con la legislación nacional, debe asegurarse de que esta también es compatible con las disposiciones pertinentes del derecho internacional¹.

¹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 50/2018, 42/2012 y 46/2011.

Categoría I

42. El Grupo de Trabajo examinará en primer lugar si se han cometido violaciones comprendidas en la categoría I, que se refiere a la privación de libertad sin fundamento jurídico.

43. La fuente afirma que, el 29 de junio de 2017, cuando se detuvo al Sr. Al-Faraj, no se le presentó una orden de detención ni se le informó de los motivos de esta. El Gobierno ha rechazado estas alegaciones. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha fundamentado su afirmación de que en el momento de la detención se presentó la debida orden judicial y se notificaron los motivos de la detención.

44. Como ya ha establecido el Grupo de Trabajo, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención, lo que no se hizo en el presente caso².

45. El derecho internacional de los derechos humanos incluye el derecho a que se presente una orden de detención, para garantizar el ejercicio de un control efectivo por parte de una autoridad judicial competente, independiente e imparcial, lo que es inherente, desde un punto de vista procesal, al derecho a la libertad y seguridad personales y a la prohibición de su privación arbitraria, en virtud de los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, y los principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión³.

46. Además, el Grupo de Trabajo toma nota de la respuesta del Gobierno, de que se dictó una orden de detención de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2013. A este respecto, el Grupo de Trabajo observa que los artículos 2 y 4 de dicha Ley establecen, respectivamente, que los delitos de terrorismo y su financiación serán sancionados por la ley y que el Ministro del Interior emitirá una orden de detención contra los presuntos delincuentes. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda su jurisprudencia anterior relativa a la Arabia Saudita⁴, en la que cuestionaba la legalidad de las órdenes de detención dictadas en virtud del artículo 4 de esa Ley⁵. Una orden de detención dictada por el Ministro del Interior o sus órganos delegados, como la Dirección General de Investigación (Al Mabahiz), con arreglo al artículo 4 de la Ley, no satisface el requisito de que toda forma de detención o prisión deba ser ordenada o quedar sujeta a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad establecida por la ley, cuyo rango y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de competencia, imparcialidad e independencia, de conformidad con el principio 4 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. El Grupo de Trabajo subraya que toda privación de libertad sin una orden de detención válida dictada por una autoridad judicial competente, independiente e imparcial, y sujeta a la supervisión de una autoridad judicial, es arbitraria y carece de fundamento jurídico.

47. El Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Al-Faraj, practicada sin una orden judicial y sin invocar sus motivos, vulneró el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

48. El Grupo de Trabajo concluye también que, para invocar el fundamento jurídico de la privación de libertad, las autoridades deberían haber notificado sin demora al Sr. Al-Faraj, en el momento de la detención, los motivos de esta y las acusaciones en su contra⁶. La omisión de tal deber infringe los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio 10

² Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 93/2017, párr. 44; núm. 10/2018, párrs. 45 a 46; y núm. 34/2020, párr. 44.

³ Véanse, por ejemplo, las decisiones núm. 1/1993, párrs. 6 y 7; núm. 33/2020, párr. 54; y núm. 34/2020, párr. 46. Véase también el art. 14, párr. 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 93/2017 y 10/2018.

⁵ Opiniones núm. 93/2017, párr. 44; y núm. 10/2018, párr. 46.

⁶ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 10/2015, párr. 34. Véanse, también, las opiniones núm. 32/2019, párr. 29; y núm. 34/2020, párr. 47.

del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, y hace que la detención carezca de todo fundamento jurídico⁷.

49. La fuente sostiene, además, y el Gobierno tampoco lo refuta plenamente, que el Sr. Al-Faraj fue víctima de desaparición forzada y permaneció en régimen de incomunicación durante siete días, desde su detención al 29 de junio de 2017.

50. Esa privación de libertad, con la negativa a revelar la suerte o el paradero de los interesados, o a reconocer su reclusión, carece de todo fundamento jurídico en cualquier circunstancia y es intrínsecamente arbitraria, ya que sustrae a la persona del amparo de la ley, en contravención del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos⁸. Los artículos 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también confirman la inadmisibilidad de la reclusión en régimen de incomunicación. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

51. El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno que también ha calificado la reclusión secreta —que conlleva elementos de incomunicación y desaparición forzada— de arbitraria *per se*, con arreglo a la categoría I, en el párrafo 19 de su opinión núm. 14/2009, citado en el párrafo 20 del Estudio conjunto sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo (A/HRC/13/42)⁹. En el resumen del Estudio conjunto se reitera que en ningún lugar del mundo se debería permitir que alguien sea privado de su libertad en secreto, por períodos que pueden ser indefinidos, y quede fuera del alcance de la ley sin la posibilidad de recurrir a procedimientos judiciales, como el recurso de *habeas corpus*¹⁰.

52. Además, la fuente informó de que el Sr. Al-Faraj había sido detenido el 29 de junio de 2017, que las acusaciones se le habían notificado el 16 de septiembre de 2019 en la primera vista y que este había permanecido en régimen de incomunicación. El Grupo de Trabajo observa que, por consiguiente, el Sr. Al-Faraj no fue llevado rápidamente ante un juez. Si bien las normas internacionales recogidas en la jurisprudencia del Grupo de Trabajo prescriben que toda persona detenida debe comparecer ante un juez en un plazo de 48 horas¹¹, una norma más estricta (24 horas) debía aplicarse al caso del Sr. Al-Faraj en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño¹². El Grupo de Trabajo recuerda también que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Específicamente, la reclusión previa al juicio del Sr. Al-Faraj carecía de fundamento jurídico, ya que no se basó en una determinación individualizada de que resultaba razonable y necesaria, habida cuenta de todas las circunstancias y habiendo examinado si las alternativas harían que la reclusión fuera innecesaria en el caso concreto¹³. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo concluye que el Gobierno ha quebrantado los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, y los principios 11, 37 y 38 del

⁷ Véase también el art. 14, párrs. 1 y 3, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

⁸ Véase el art. 1 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que condena todo acto de desaparición forzada “como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave y manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales pertinentes”, así como, por ejemplo, las opiniones núm. 82/2018, párr. 28; núm. 33/2020, párrs. 58 y 73; y núm. 34/2020, párr. 49. Véase también el art. 22 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

⁹ El artículo 10 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas también estipula que toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, presentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión. Véanse también las opiniones núm. 5/2001, párr. 10 iii); núm. 14/2009, párr. 21; núm. 11/2018, párr. 51; núm. 12/2018, párr. 62; núm. 29/2018, párr. 50; y núm. 38/2018, párr. 66.

¹⁰ A/HRC/16/47, párr. 54.

¹¹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 57/2016, párrs. 110 y 111; núm. 33/2020, párr. 75; y núm. 34/2020, párr. 51.

¹² Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 10 (2007), párr. 83, citada en la opinión núm. 26/2019, párr. 89.

¹³ Véase también A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58; y la opinión núm. 26/2019, párr. 89.

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión¹⁴.

53. El Grupo de Trabajo observa además que al Sr. Al-Faraj no se le concedió el derecho a recurrir ante un tribunal para que este se pronunciara sin demora sobre la legalidad de su detención, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, y los principios 11, 32 y 37 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. En los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37) se indica que el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo, esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática, y cuya ausencia constituye una violación de los derechos humanos (párrs. 2 y 3). Este derecho se aplica a todas las formas y situaciones de privación de libertad, independientemente del lugar de detención o la terminología jurídica utilizada en la legislación. (anexo, párr. 47 a) y b)), y la supervisión y el control judiciales efectivos de la privación de libertad son esenciales para garantizar que la detención tenga un fundamento jurídico¹⁵.

54. El Grupo de Trabajo analizará en detalle la idoneidad de la privación de libertad con arreglo a la Ley de Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2013 en el presente caso, a la luz del principio de legalidad y sus efectos en el derecho a un juicio imparcial y otras libertades. El Grupo de Trabajo recuerda que no es la primera vez que se le pide que examine la aplicación de las disposiciones de esta Ley¹⁶.

55. Una de las garantías fundamentales del debido proceso es el principio de legalidad, lo que significa que un acto solo podrá ser sancionado si, en el momento de su comisión, era materia de derecho penal escrito, válido y suficientemente preciso que conllevara penas suficientemente previsibles¹⁷.

56. El artículo 1 a) de la Ley de Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2013 define el delito de terrorismo como todo acto cometido directa o indirectamente por el delincuente en ejecución de un proyecto criminal individual o colectivo, cuyo propósito sea alterar el orden público, atentar contra la seguridad de la sociedad y la estabilidad del Estado o poner en peligro la unidad nacional, la Constitución (Ley Fundamental) o parte de ella, perjudicar a la reputación o la posición del Estado, causar daños en instalaciones públicas o en los recursos naturales del Estado, o forzar a un funcionario o autoridad, mediante amenazas, a hacer algo en el desempeño de sus funciones o a abstenerse de hacerlo.

57. El Grupo de Trabajo considera que las disposiciones redactadas en términos generales e imprecisos, que no pueden considerarse *lex certa*, podrían utilizarse para imponer la privación de libertad sin invocar un fundamento jurídico específico y vulnerar las debidas garantías procesales respaldadas por el principio de legalidad establecido en el artículo 11, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como el Grupo de Trabajo ha afirmado en ocasiones anteriores, el principio de legalidad exige que las leyes se formulen con la precisión suficiente para resultar accesibles y comprensibles para el ciudadano, de modo que este pueda modificar su conducta en consecuencia¹⁸. El Grupo de Trabajo observa además que las leyes redactadas en términos generales e imprecisos pueden tener un efecto disuasivo en el ejercicio de los derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión y de asociación pacíficas, la participación en la vida pública y política, la igualdad y la no discriminación y la protección de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, en la medida en que pueden dar lugar a abusos, incluida la privación arbitraria de libertad¹⁹.

¹⁴ Véanse también los arts. 14, párrs. 1 y 5, y 23 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

¹⁵ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 35/2018, párr. 27; núm. 33/2020, párr. 52; y núm. 34/2020, párr. 52.

¹⁶ Opiniones núms. 10/2018 y 36/2019.

¹⁷ Opiniones núm. 10/2018, párr. 50; y núm. 36/2019, párr. 40.

¹⁸ Opiniones núm. 62/2018, párr. 57; y núm. 36/2019, párr. 42.

¹⁹ Opinión núm. 10/2018, párr. 55.

58. Además, el Grupo de Trabajo no puede dejar de observar que la pena de muerte que pidió la fiscalía contra el Sr. Al-Faraj, solicitud que sigue en pie según la fuente y que, como admite incluso el propio Gobierno, seguía vigente hasta que la Ley de Menores en Conflicto con la Ley (Real Decreto núm. 113 de 31 de julio de 2018) abolió la pena de muerte para los delitos *ta'zir* cometidos cuando el autor aún no ha cumplido los 18 años de edad, contraviene claramente el artículo 37 a) de la Convención sobre los Derechos del Niño y es, en cualquier caso, nula y sin valor, ya que su fundamentación jurídica es deficiente²⁰.

59. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Al-Faraj carece de fundamento jurídico y es, por lo tanto, arbitraria y se inscribe en la categoría I.

Categoría II

60. La fuente afirma que el Sr. Al-Faraj fue detenido y acusado por asistir a funerales de personas a las que el Estado había presuntamente dado muerte y por corear consignas contra el Estado en protestas políticas. El Gobierno ha negado estas acusaciones exponiendo los cargos que se le imputan. Para el Grupo de Trabajo, la fuente ha establecido a primera vista que el presente caso se refiere a presuntas violaciones de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión y de asociación y a la libertad de participar en la dirección de los asuntos públicos.

61. El Grupo de Trabajo observa que las personas, incluidos los niños, participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo su influencia a través del debate público y el diálogo con sus representantes, o mediante su capacidad para organizarse, y que esta participación se ve respaldada por la garantía de la libertad de expresión, reunión y asociación, de conformidad con los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos²¹. Además, dado que las reuniones pacíficas suelen tener funciones de expresión, y que el discurso político goza de especial protección como forma de expresión, se deduce que las reuniones con un mensaje político deberían ser objeto de un mayor nivel de adaptación y protección.

62. El artículo 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que las únicas limitaciones legítimas al ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades de toda persona serán aquellas que tengan por fin asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

63. En opinión del Grupo de Trabajo, el principio de necesidad y proporcionalidad es consustancial a todos los derechos humanos fundamentales por igual. El Grupo de Trabajo confirmó en su deliberación núm. 9 que la noción de “arbitraria” entraña *stricto sensu* el incumplimiento de la exigencia de que la forma particular de privación de libertad se imponga con arreglo al derecho y los procedimientos aplicables y de que sea proporcionada respecto de la finalidad que se persigue, razonable y necesaria (A/HRC/22/44, secc. III, párr. 61). En su jurisprudencia con respecto a la aplicación del principio de proporcionalidad, el Grupo de Trabajo se ha basado en la determinación de los cuatro elementos siguientes: a) si el objetivo de la medida era lo suficientemente importante para justificar la limitación de un derecho protegido; b) si la medida estaba racionalmente vinculada con el objetivo; c) si se podría haber aplicado una medida menos intrusiva sin que peligrara de forma inaceptable el logro del objetivo; y d) si, al comparar la gravedad de los efectos de la medida sobre los derechos de las personas a las que se aplicaba con la importancia del objetivo, siempre que la medida contribuyera a su consecución, la importancia del objetivo superaba la gravedad de los efectos²².

64. Con arreglo a los criterios que preceden, el Grupo de Trabajo concluye que la situación descrita en el presente caso no cumple los requisitos de proporcionalidad. No hay pruebas de ningún tipo de violencia o incitación a la violencia, y el Gobierno no ha ofrecido

²⁰ Opinión núm. 26/2019, párr. 91.

²¹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 16/2020, núm. 15/2020 y núm. 46/2011.

²² Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 54/2015, párr. 89; núm. 87/2018, párr. 64; y núm. 32/2020, párr. 49.

explicación alguna sobre cómo se ha cerciorado, en el presente caso, de que las restricciones impuestas fueran permisibles. Por lo tanto, no se ha cumplido el criterio para determinar que las restricciones fueran permisibles, que exige un fin u objetivo legítimo en una sociedad libre y democrática.

65. Además, el Grupo de Trabajo considera que el artículo 1 a) de la Ley de Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2013 está redactado términos demasiado generales e imprecisos, como se ha dicho anteriormente, por lo cual desalienta el ejercicio de las libertades. Preocupa al Grupo de Trabajo que, aparentemente, estas disposiciones no incluyen una definición clara, por lo que pueden utilizarse para castigar, como en el presente caso, el ejercicio pacífico de los derechos humanos y no permitían al Sr. Al-Faraj modificar su conducta en consecuencia.

66. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad del Sr. Al-Faraj es arbitraria, y se inscribe en la categoría II, ya que resulta del ejercicio legítimo de los derechos y libertades previstos en los artículos 19, 20, párrafo 1, y 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 13, párrafo 1, y 15, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño²³.

Categoría III

67. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Al-Faraj es arbitraria y se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo desea destacar que, en tales circunstancias, no debería celebrarse ningún juicio. Sin embargo, dado que el Sr. Al-Faraj se encuentra en prisión preventiva con vistas a su enjuiciamiento penal, el Grupo de Trabajo examinará ahora las presuntas violaciones del derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales.

68. La fuente alega, y el Gobierno no ha fundamentado su afirmación en contrario, que el Sr. Al-Faraj no ha tenido acceso a un abogado de su elección desde su detención el 29 de junio de 2017.

69. En opinión del Grupo de Trabajo, el Gobierno no respetó el derecho del Sr. Al-Faraj a gozar de asistencia letrada en todo momento, que es inherente al derecho a la libertad y seguridad personales, ni su derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, de conformidad con los artículos 3, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 37 b) y d) y 40, párrafo 2) b) ii) y iii), de la Convención sobre los Derechos del Niño, los principios 15, 17 y 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, y los principios 1, 5, 7, 8, 21 y 22 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados²⁴.

70. El Grupo de Trabajo considera que esta vulneración menoscabó y perjudicó considerablemente la capacidad del Sr. Al-Faraj para defenderse en cualquier procedimiento judicial posterior. Como señaló el Grupo de Trabajo en el principio 9 y la directriz 8 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, las personas privadas de libertad deben tener el derecho a la asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento de su reclusión, en particular inmediatamente después de que se practique la detención, derecho del que deben ser puntualmente informadas en el momento de la detención; el acceso a un abogado tampoco se debe restringir ilegal o injustificadamente (A/HRC/30/37, anexo, párrs. 12 a 15 y 67 a 71)²⁵.

71. El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por el artículo 6 de la Ley de Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2013, que establece que, sin perjuicio del derecho del detenido a ponerse en contacto con sus familiares para informarles de su detención, se podrá

²³ Véanse también los arts. 24, párrs. 1, 2, 5 y 6, 30, párr. 1, y 32, párr. 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

²⁴ Véanse también los arts. 12, 13, párr. 1, 14, párr. 1, y 16, párrs. 2 y 3, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

²⁵ Véanse también A/HRC/45/16, párr. 51; y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 34.

dictar, en interés de la investigación, una orden que impida cualquier otro contacto durante un período de hasta 90 días. Esta facultad general de negar el acceso a la asistencia letrada sin las debidas garantías procesales contraviene el derecho internacional sobre el derecho a un juicio imparcial.

72. El Grupo de Trabajo señala también que al Sr. Al-Faraj se le negó el derecho inherente a las debidas garantías procesales a ser visitado por sus familiares y a mantener correspondencia con ellos y a gozar de oportunidades suficientes de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables especificadas por ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, con arreglo al artículo 37 c) de la Convención sobre los Derechos del Niño, los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, y las reglas 43, párrafo 3, y 58 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). El acceso rápido y periódico a los familiares, así como a personal médico y abogados independientes es una salvaguardia esencial y necesaria para la prevención de la tortura, así como para la protección contra la reclusión arbitraria y la vulneración de la seguridad personal²⁶.

73. El Grupo de Trabajo opina que la reclusión preventiva del Sr. Al-Faraj durante tres años y cinco meses sin que se dictara una resolución judicial individualizada ha menoscabado la presunción de inocencia garantizada en el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 40, párrafo 2 b) i) de la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio 36, párrafo 1, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión²⁷.

74. La prolongada reclusión del Sr. Al-Faraj, durante tres años y cinco meses, sin perspectivas inmediatas de juicio, también constituye una clara violación del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, según los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 40, párrafo 2 b) iii) de la Convención sobre los Derechos del Niño.

75. El Grupo de Trabajo también expresa su grave preocupación por las alegaciones de tortura durante la reclusión preventiva del Sr. Al-Faraj, durante la cual se lo mantuvo en régimen de aislamiento por dos meses, y se lo sometió a palizas y posturas forzadas, mientras se lo interrogaba. El Gobierno no ha especificado en qué momento se le dispensó el tratamiento médico periódico.

76. Con respecto a los dos meses que el Sr. Al-Faraj permaneció recluso en régimen de aislamiento, el Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con la regla 45 de las Reglas Nelson Mandela, la imposición de ese régimen de reclusión debe ir acompañada de ciertas salvaguardias. El aislamiento solo se aplicará en casos excepcionales, como último recurso, durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente, y únicamente con el permiso de una autoridad competente. Al parecer, esas condiciones no se han respetado en el presente caso. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento durante más de 15 días consecutivos está prohibida en virtud de las reglas 43, párrafo 1 b), y 44 de las Reglas Nelson Mandela²⁸.

77. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que la fuente ha presentado alegaciones verosímiles de que en el presente caso se ha vulnerado la prohibición absoluta de la tortura consagrada en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2 y 16, párrafo 1, de la Convención contra la Tortura y el artículo 37 a) de la Convención sobre los Derechos del Niño²⁹. El hecho de que el Gobierno no haya adoptado medidas correctivas también infringe los artículos 12, 13 y 14, párrafo 1, de la Convención contra la Tortura, así como el principio 33 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión³⁰. La insistencia del

²⁶ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 10/2018, párr. 74; núm. 33/2020, párr. 87; y núm. 34/2020, párr. 57.

²⁷ Véase también el art. 16 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

²⁸ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 17/2019 y 83/2018.

²⁹ Véase también el art. 14, párrs. 1 y 3, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

³⁰ Véase también el art. 8, párr. 2, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

Gobierno en que la confesión del Sr. Al-Faraj fue voluntaria, lo que supone que será admitida como prueba en el juicio, conculca el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y el artículo 40, párrafo 2 b) iv), de la Convención sobre los Derechos del Niño³¹.

78. El Grupo de Trabajo expresa además suma preocupación por la prolongada reclusión del Sr. Al-Faraj en régimen de incomunicación. La Asamblea General ha sostenido sistemáticamente, primero en su resolución 60/148 (párr. 11) y más recientemente en su resolución 74/143 (párr. 17), que la detención prolongada en régimen de incomunicación o en lugares secretos puede facilitar la comisión de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y constituir de por sí una forma de tales tratos, vulnera el derecho a preparar una defensa jurídica apropiada y atenta gravemente contra la imparcialidad del proceso. En consecuencia, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para su examen.

79. En vista de cuanto antecede, el Grupo de Trabajo concluye que las violaciones del derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales son de una gravedad tal que confieren a la privación de libertad del Sr. Al-Faraj carácter arbitrario y que esta se inscribe en la categoría III.

Categoría V

80. El Grupo de Trabajo examinará a continuación si la privación de libertad del Sr. Al-Faraj constituye discriminación con arreglo al derecho internacional a los efectos de la categoría V.

81. El Grupo de Trabajo observa la discriminación histórica del Gobierno y de la mayoría suní contra la minoría étnico-religiosa chií en la Provincia Oriental. La represión, que incluyó ejecuciones en masa de chiíes tras el movimiento de protesta de 2011, constituye el telón de fondo de la detención, el juicio y la posible condena a muerte del Sr. Al-Faraj. El Grupo de Trabajo recuerda la suerte de tres detenidos chiíes, Abdelkarim Mohamed Al Hawaj y Mounir Abdullah Ahmad Aal Adam (opinión num. 26/2019) y Abbas Haiji Al-Hassan (opinión núm. 56/2019), cuyas condenas a muerte se ejecutaron, a pesar de que el Grupo de Trabajo había pedido la adopción de medidas provisionales para garantizar su integridad física y mental, en el marco de la decapitación masiva de 37 hombres, en su mayoría chiíes, el 23 de abril de 2019³².

82. El Grupo de Trabajo observa también que, en 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por que las minorías étnico-religiosas tropezaban con obstáculos para ejercer libremente su derecho a la libertad de religión y de creencias y por que algunas minorías étnico-religiosas sufrían discriminación en la educación, el empleo y el sistema jurídico (CERD/C/SAU/CO/4-9, párr. 23). El Comité recomendó a la Arabia Saudita que adoptara todas las medidas necesarias para proteger los derechos de las minorías étnico-religiosas, incluido su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, como se establece en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y que eliminara todos los obstáculos con que tropezaban las minorías étnico-religiosas en la educación, en particular eliminando en los libros de texto los comentarios despectivos sobre otras religiones, así como en el empleo y en el sistema jurídico (CERD/C/SAU/CO/4-9, párr. 24). El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre cuestiones de las minorías y al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias.

83. La participación del Sr. Al-Faraj en protestas políticas y su presunta persecución pueden entenderse en el contexto de la omnipresente discriminación y persecución que sufren las minorías étnico-religiosas chiíes.

³¹ Véase también el art. 16, párr. 6, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

³² Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "Bachelet strongly condemns mass executions in Saudi Arabia", 24 de abril 2019, disponible en www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24510&LangID=E.

84. Tras examinar todos los elementos del caso, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Al-Faraj constituye una violación de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2, párrs. 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio 5 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, por motivos de discriminación basados en su origen étnico-religioso y opinión política³³. Así pues, su privación de libertad se inscribe en la categoría V.

Observaciones finales

85. Habida cuenta de su conclusión de que el Sr. Al-Faraj fue privado arbitrariamente de su libertad sin fundamento jurídico, como consecuencia del ejercicio de su libertad de expresión y en violación de su derecho a un juicio imparcial y a la no discriminación, el Grupo de Trabajo considera que el escrito de acusación original, en el que se solicitaba su condena a muerte es indefendible, y que la posibilidad de que sea ejecutado, un peligro que sigue vigente, es inexcusable. Es muy preocupante que incluso el decreto real del 24 de marzo de 2020 se refiera a los delitos *ta'zir*, y no a los delitos *hudud* por los que el Sr. Al-Faraj corre el riesgo de ser ejecutado; de hecho, su familia aún no ha recibido una acusación modificada que ya no solicite la pena de muerte. Por lo tanto, el Gobierno ha incumplido su obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la vida en virtud del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos³⁴.

86. El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno que la Asamblea General, desde la aprobación de su resolución 62/149, de 18 de diciembre de 2007 (para. 2 d)), ha exhortado sistemáticamente a todos los Estados a que establezcan una moratoria de las ejecuciones, con miras a abolir la pena de muerte. Más recientemente, en su resolución 73/175, de 17 de diciembre de 2018 (párr. 7), la Asamblea General exhortó a todos los Estados a que respetaran las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte³⁵; limitaran progresivamente el uso de la pena de muerte y no impusieran la pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años; redujeran el número de delitos por los que se puede imponer la pena de muerte; se aseguraran de que la pena de muerte no se aplicara sobre la base de leyes discriminatorias ni como resultado de la aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley; y establecieran una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte³⁶. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

87. En sus 29 años de historia, el Grupo de Trabajo ha determinado que la Arabia Saudita ha violado sus obligaciones internacionales de derechos humanos en unos 60 casos³⁷. Preocupa al Grupo de Trabajo que ello indique un problema generalizado o sistémico de detención arbitraria en la Arabia Saudita, que constituya una grave vulneración del derecho internacional. La obligación de respetar las normas internacionales de derechos humanos incumbe a todos los órganos, funcionarios y agentes del Estado, así como a todas las demás personas físicas y jurídicas. El Grupo de Trabajo recuerda que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras situaciones graves de privación de libertad contrarias a las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad³⁸.

³³ Véase también el art. 3, párr. 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

³⁴ Véase también el art. 5, párrs. 1 y 2, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

³⁵ Véase www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/deathpenalty.aspx.

³⁶ Véase también la resolución de la Asamblea General 75/183.

³⁷ Véanse las decisiones núms. 40/1992, 60/1993, 19/1995 y 48/1995, y las opiniones núms. 8/2002, 25/2004, 34/2005, 35/2005, 9/2006, 12/2006, 36/2006, 37/2006, 4/2007, 9/2007, 19/2007, 27/2007, 6/2008, 11/2008, 13/2008, 22/2008, 31/2008, 36/2008, 37/2008, 21/2009, 2/2011, 10/2011, 11/2011, 17/2011, 18/2011, 19/2011, 30/2011, 31/2011, 33/2011, 41/2011, 42/2011, 43/2011, 44/2011, 45/2011, 8/2012, 22/2012, 52/2012, 53/2012, 32/2013, 44/2013, 45/2013, 46/2013, 14/2014, 32/2014, 13/2015, 38/2015, 52/2016, 61/2016, 10/2017, 63/2017, 93/2017, 10/2018, 68/2018, 22/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019 y 33/2020.

³⁸ Véanse A/HRC/13/42, párr. 30, y, por ejemplo, las opiniones núm. 1/2011, párr. 21; núm. 51/2017, párr. 57; y núm. 56/2017, párr. 72.

88. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción las promesas voluntarias realizadas por la Arabia Saudita con arreglo a la resolución 60/251 de la Asamblea General relativa al Consejo de Derechos Humanos³⁹. En particular, el Grupo de Trabajo alaba la voluntad expresada por el Gobierno de cooperar con el Consejo de Derechos Humanos y sus diversos mecanismos, incluidos los procedimientos especiales. Habida cuenta de ello, al Grupo de Trabajo le complacería tener la oportunidad, tan pronto como al Gobierno le parezca oportuno, de realizar una visita al país, a fin de entablar un diálogo constructivo con el Gobierno y ofrecerle asistencia para atender las graves inquietudes que le suscitan los casos de privación arbitraria de libertad.

Decisión

89. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Essam Al-Faraj es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, párrafos 1 y 2, 19, 20, párrafo 1, y 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 2, 13, párrafo 1, 15, párrafo 1, 37, párrafos a), b), c) y d), y 40, párrafos 2 b) i), ii), iii) y iv) de la Convención sobre los Derechos del Niño, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

90. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno la Arabia Saudita que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Al-Faraj sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

91. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Al-Faraj inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional⁴⁰. En el contexto actual de la pandemia mundial de COVID-19 y la amenaza que ello supone en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte medidas urgentes para poner de inmediato en libertad al Sr. Al-Faraj.

92. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Al-Faraj y adopte las correspondientes medidas contra los responsables de la violación de sus derechos.

93. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la Arabia Saudita que ajuste sus leyes, en particular las disposiciones pertinentes de la Ley de Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2013, a las recomendaciones formuladas en la presente opinión y los compromisos asumidos por la Arabia Saudita en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

94. El Grupo de Trabajo recomienda al Gobierno que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus Protocolos Facultativos.

95. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, al Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, a la Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, al Relator Especial

³⁹ Véase A/75/377.

⁴⁰ Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, deliberación núm. 10 (A/HRC/45/16, anexo I) (en la que se determinan las amplias reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de la privación arbitraria de libertad).

sobre cuestiones de las minorías y al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, para que adopten las medidas pertinentes.

96. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

97. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Al-Faraj y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Al-Faraj;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Al-Faraj y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la Arabia Saudita con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

98. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo mediante una visita del Grupo de Trabajo.

99. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

100. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁴¹.

[Aprobada el 27 de noviembre de 2020]

⁴¹ Consejo de Derechos Humanos, resolución 42/22, párrs. 3 y 7.